

Actuar antes, no después: cinco compromisos de Estado frente a los grandes incendios.

Necesitamos paisajes vivos y núcleos de población seguros

Cada verano volvemos a confiar la protección de nuestros pueblos y ciudades, nuestros paisajes y nuestras vidas a quienes se enfrentan al fuego. Y, este verano, estamos viviendo una situación sin precedentes. Todo nuestro apoyo, reconocimiento y respeto a los dispositivos implicados en la gestión de estos incendios y a las personas afectadas.

Cuando un incendio alcanza una intensidad que supera la capacidad de extinción, muchas de las decisiones que podían reducir sus consecuencias ya llegan tarde.

El objetivo no es que no haya incendios. El fuego forma parte de muchos ecosistemas y no puede ni debe eliminarse por completo. El objetivo es reducir el riesgo de que los incendios se conviertan en grandes emergencias capaces de superar a los servicios de extinción, poner en peligro a la población y causar daños ecológicos, sociales y económicos irreversibles.

No podemos seguir reaccionando únicamente cuando el fuego ya está fuera de control.

Necesitamos actuar durante todo el año.

Y necesitamos hacerlo mediante compromisos estables, compartidos entre administraciones, participados por la población y mantenidos más allá de los cambios políticos y de cada campaña de incendios.

Pedimos CINCO compromisos concretos

1. Gestionar cada año, como mínimo, el 1% de la superficie forestal de España

Pedimos que cada año se gestione, como mínimo, el 1% de la superficie forestal del estado, priorizando las zonas donde las actuaciones permitan reducir en mayor medida el riesgo de grandes incendios, proteger a la población, mejorar la resiliencia de los ecosistemas y generar bioeconomía.

Gestionar no significa eliminar vegetación ni intervenir de la misma manera en todas partes.

Significa planificar paisajes diversos y funcionales, con bosques maduros bien conservados, masas forestales gestionadas, espacios abiertos, pastos, cultivos, matorrales, riberas y zonas de transición que puedan sobrevivir a grandes incendios.

Esta diversidad de hábitats es esencial para conservar la biodiversidad, mantener los servicios que nos presta la naturaleza y, allí donde sea necesario, reducir la continuidad de la vegetación (combustible para el fuego) para dificultar la propagación de incendios extremos y ofrecer oportunidades de gestión de grandes incendios.

Las actuaciones deben adaptarse a cada territorio y combinar distintas herramientas: gestión forestal sostenible, agricultura, ganadería extensiva, herbivoría, recuperación de espacios abiertos, restauración ecológica y quemas prescritas realizadas por personal cualificado.

No se trata de escoger entre prevención y conservación.

Se trata de gestionar mejor para conservar paisajes más vivos, diversos y resistentes.

2. Destinar, como mínimo, 1 000 millones de euros al año a la gestión y protección del territorio

Gestionar como mínimo el 1% de la superficie forestal requiere recursos estables, suficientes y mantenidos en el tiempo.

Pedimos una inversión pública de, como mínimo, 1 000 millones de euros anuales para gestionar el paisaje, conservar la biodiversidad, reducir el riesgo, mantener las actuaciones realizadas y proteger pueblos, viviendas e infraestructuras.

Según la recopilación de ASEMFO^[1], elaborada con datos de las administraciones públicas y en colaboración con MITECO, la Administración General del Estado y las comunidades autónomas ejecutaron 175,8 millones de euros en partidas clasificadas como prevención de incendios forestales en 2022.

Prevenir es más barato que extinguir.

No es aceptable que la prevención dependa de proyectos aislados, presupuestos puntuales o actuaciones que después no se mantienen.

La gestión del riesgo debe ser una política pública permanente, no una reacción de emergencia cada verano.

Los recursos deben dirigirse prioritariamente a las zonas estratégicas en terrenos – tanto públicos como privados –, a la defensa de los núcleos de población y a las actuaciones que aporten varios beneficios al mismo tiempo: reducir el riesgo, conservar hábitats, apoyar la economía rural y facilitar un trabajo más seguro a los servicios de extinción.

3. Apoyar a quienes mantienen vivo y diverso el territorio

Agricultores/as, ganaderos/as, pastores/as, propietarios/as, gestores/as forestales y entidades de conservación desempeñan un papel esencial en el mantenimiento de paisajes vivos.

Los espacios agrarios, los pastos, los bosques gestionados, los bosques maduros y los espacios abiertos forman parte de un mismo mosaico territorial. Cada uno aporta funciones ecológicas diferentes y todos pueden contribuir a aumentar la resiliencia frente a los grandes incendios.

El abandono de determinadas actividades forestales, agrarias y ganaderas ha favorecido en muchos territorios la continuidad de la vegetación y la acumulación de combustible. Al mismo tiempo, una gestión mal planificada puede empobrecer los ecosistemas y perjudicar a la biodiversidad.

Por eso pedimos políticas que hagan viable vivir y trabajar en el medio rural, que pongan en valor el sector primario, que apoyen actividades compatibles con la conservación de la naturaleza y que reconozcan los servicios ambientales que estas personas prestan al conjunto de la sociedad.

Esto significa apoyar con leyes adaptadas, ayudas económicas y recursos concretos la ganadería extensiva, la agricultura familiar y de montaña, la gestión forestal sostenible, la conservación activa de hábitats, la bioeconomía local y la producción y consumo de proximidad. Y ayudar a adaptar estas actividades al cambio climático

Cuidar el territorio también significa cuidar a quienes lo gestionan cada día.

4. Proteger los núcleos de población y preparar a la ciudadanía

Muchos pueblos, viviendas aisladas, urbanizaciones, infraestructuras y actividades económicas (incluyendo el sector turístico, hoteles y casas rurales) se encuentran cerca de zonas forestales.

Pedimos que estas áreas dispongan de medidas de protección mantenidas, planes de prevención y autoprotección participados con la población, información clara sobre cómo actuar antes y durante un incendio y recursos para su implementación

La ciudadanía debe conocer el riesgo de su entorno y disponer de herramientas para prepararse. Necesitamos programas permanentes de educación, comunicación y sensibilización dirigidos a escuelas, municipios, urbanizaciones, empresas y visitantes. E incorporar la participación social en la elaboración de los planes de prevención y autoprotección y en su implementación.

Esta preparación debe incluir mapas de riesgo accesibles, sistemas de alerta temprana, planes locales de prevención y autoprotección, información clara sobre evacuación y confinamiento, y herramientas que permitan a la ciudadanía conocer cómo evoluciona una emergencia y cuál es la mejor manera de actuar

5. Coordinar las políticas públicas y hacer seguimiento

También pedimos una cooperación estable entre las administraciones del Estado, las comunidades autónomas, las diputaciones y las entidades locales, respetando sus competencias y coordinando las políticas forestales, agrarias, de adaptación al cambio climático, de conservación de la naturaleza, de urbanismo, vivienda, educación y protección civil.

Pedimos generar espacios formales para el diálogo, la gestión conjunta y la coordinación con el resto de agentes que intervienen en el territorio, a diferentes escalas, desde la estatal hasta la local.

Los dispositivos de emergencia deben disponer también de información compartida, procedimientos compatibles y capacidad de análisis para anticipar el comportamiento de los incendios y apoyar la toma de decisiones.

Esta cooperación debe traducirse en objetivos claros, presupuestos suficientes e información pública que permita saber qué actuaciones se han previsto, cuáles se han ejecutado, cuánto se ha invertido y qué resultados se han conseguido.

Después de cada gran incendio deben evaluarse las decisiones adoptadas, compartirse las lecciones aprendidas y orientar la restauración hacia paisajes adaptados a las condiciones climáticas futuras.

La ciudadanía tiene derecho a saber si los compromisos se cumplen.

Todos estos compromisos deben basarse en el conocimiento científico, técnico, y local, aprovechar la experiencia de quienes trabajan y habitan el territorio y disponer de datos públicos que permitan evaluar y mejorar las decisiones.

Actuar antes, no después

Los servicios de prevención y extinción realizan una labor imprescindible que debe ser reconocida con condiciones laborales dignas y los recursos necesarios, pero no pueden resolver por sí solos un problema que se construye durante todo el año.

No podemos seguir dejando toda la responsabilidad a quienes se enfrentan al fuego cuando el incendio ya está en marcha.

Necesitamos paisajes vivos, diversos, resilientes y seguros. Necesitamos conservar la biodiversidad. Necesitamos núcleos de población preparados y un mundo rural con futuro.

Por eso pedimos:

- Gestionar cada año, como mínimo, el 1% de la superficie forestal de España
- Destinar alrededor de 1 000 millones de euros anuales a la gestión y protección del territorio
- Apoyar a quienes mantienen vivo y diverso el medio rural
- Proteger mejor los pueblos y preparar a la ciudadanía
- Coordinar las políticas públicas y hacer seguimiento

No pedimos promesas después de cada gran incendio.

Pedimos planificación, recursos, continuidad y resultados.

Estas medidas deben formar parte de un compromiso estable de país, asumido por todas las administraciones competentes y protegido frente a los cambios políticos y presupuestarios.

Estos puntos se basan en la Declaración sobre la gestión de grandes incendios forestales en España de la Fundación Pau Costa, documento de consenso ya compartido con partidos políticos.

<https://www.paucostafoundation.org/adhesion-a-la-declaracion-sobre-la-gestion-de-los-grandes-incendios-forestales-en-espana/>

Firma para exigir que se actúe antes del próximo gran incendio, no después.

^[1] Asociación Nacional de Empresas Forestales. Estos datos excluyen partidas que también pueden incluir acciones de prevención, como servicios de extinción y prevención de incendios.